

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE	: LUIS RODRIGO SÁNCHEZ MARÍN
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-010-2018-00751-01
RADICADO INTERNO	: 003-23
DECISIÓN	: CONFIRMA POR OTRAS RAZONES, MODIFICA Y CONDENA
ACTA NÚMERO	: 055

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia en el grado jurisdiccional de consulta, el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante solicita el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de origen común, en forma retroactiva; los intereses moratorios; la indexación de la condena; y el pago de las costas procesales.

Se fundamentan sus pretensiones, señalando que cotizó a Colpensiones un total de 421.14 semanas, desde el 28 de marzo de 1988 al 30 de junio de 2002; en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, se determinó que el demandante tiene una pérdida de la capacidad laboral de 55% estructurada el 24 de septiembre de 2003; el actor elevó reclamación el 24 de mayo de 2018 y mediante resolución 398.837 de 2018, la accionada negó la pensión solicitada.

Afirma que Colpensiones omitió la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 797 de 2003, la cual está vigente al momento de la estructuración de la invalidez; el demandante cotizó 75.57 semanas entre el 1º de enero de 2001 al 19 de junio de 2002.

### **RESPUESTA A LA DEMANDA**

Colpensiones en su contestación, dice que no le consta las cotizaciones realizadas del 1º de enero de 2001 al 19 de junio de 2002. Que las afirmaciones relativa a la omisión de la reforma realizada por el art. 11 de la Ley 797 de 2003 a la Ley 100 de 1993, el requisito de semanas exigido y la vigencia de la Ley 797 de 2003, sostiene que no son hechos sino apreciaciones de apoderado. Acepta los demás hechos de la demanda. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez con retroactividad, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, imposibilidad de condena simultánea de pagar intereses moratorios e indexar las sumas, prescripción, compensación indexada y pago, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones, excepción innominada (expediente digital 06).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 18 de octubre de 2022, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la pensión de invalidez a partir del 1º de julio de 2002, a razón de un salario mínimo legal en cada anualidad. Colpensiones le adeuda al demandante, a título de retroactivo pensional, compuesto por las mesadas causadas entre el 1º de julio de 2002 y el 30 de septiembre de 2022, con base en catorce mesadas por año, la suma de \$168.425.512, suma sobre la cual deberán efectuarse los descuentos para el Sistema de Seguridad Social en Salud, y que deberá ser indexada.

**ABSOLVIÓ** a Colpensiones del reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Y condenó en costas a la parte accionada.

### **IMPUGNACIÓN**

**La apoderada de la parte accionada** solicita la revocatoria de la providencia, al no estar de acuerdo con el reconocimiento de la pensión de invalidez en forma retroactiva y sin que se realicen descuentos por pago de incapacidades, subsidio, ni el descuento a salud, por considerar que en principio, se debe estudiar el cumplimiento de las semanas bajo la fecha de estructuración de la invalidez, y en ese sentido, el demandante no acredita las 26 semanas en el año anterior a la fecha de la estructuración de la pérdida de la capacidad laboral (24 de septiembre de 2002 al 24 de septiembre de 2003) al no presentar cotizaciones y estar inactivo, por lo que no tiene derecho al reconocimiento de la pensión en aplicación de la Ley 100 de 1993 primigenia.

En segundo lugar, en lo que respecto a la invalidez como una enfermedad degenerativa, considera que la estructuración de la invalidez se debe desde la perspectiva material y no solo formal; la invalidez debe ser compatible con postulados constitucionales y legales; señala que el demandante debió probar la fecha hasta la cual pudo ejercer la actividad laboral y cesó las cotizaciones, que si bien se tiene que el 30 de junio de 2002 no registró cotizaciones, no es posible tomar desde esa fecha, el número de semanas para causar la prestación, como se indicó en la sentencia sino que sea desde la fecha que se determina en el dictamen de la Junta Regional de Calificación, el cual quedó ejecutoriado, y desde esa fecha se debe contabilizar las semanas.

Finalmente, frente a la negación de que se haga un descuento con ocasión al pago de incapacidades, sostiene que esa carga no se le debe imponer a Colpensiones pues si bien se ofició a la EPS Savia Salud y la misma no respondió, era carga probatoria del actor al ser quien tiene un interés sustancial frente al reconocimiento y pago de las prestaciones, por lo tanto, no se puede acarrear ese efecto adverso a la accionada para hacer los respectivos descuentos y que se presuma que no le se hizo ningún pago por incapacidades a partir de la fecha de estructuración.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de Colpensiones solicita la revocatoria de la sentencia argumentando, que conforme al dictamen emitido por Junta Regional de Calificación donde se determinó pérdida de la capacidad laboral del actor del 55% estructurada el 24 de septiembre de 2003, la norma aplicable son los requisitos de los arts. 38 y 39 de la Ley 100 de 1993. Sostiene que en este evento no hay lugar a aplicar la condición más beneficiosa, porque la Corte

Suprema de Justicia ha señalado en sentencias 493.315 de 2017 y 290.426 de 2006, que son destinatarios de la condición más beneficiosa, los afiliados que a 1º de abril de 1994 hubieren cotizado un mínimo de 150 semanas dentro de los 6 años inmediatamente anteriores al momento del cambio normativo, y en este evento, verificada la historia laboral del afiliado, se extrae que al 1º de abril de 1994 contaba con 125.86 semanas cotizadas efectivamente al sistema, de las cuales 125.29 semana fueron cotizadas dentro de los 6 años anteriores a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social, es decir del 1º de abril de 1988 al 1 de abril de 1994, razón por la cual no es procedente el estudio de la pensión de invalidez teniendo en cuenta el principio jurisprudencial de la condición más beneficiosa.

Y se opone a la condena en costas, porque si bien, de la lectura del art. 365 del CGP, se podría llevar a la errónea interpretación de que la condena en costas debe imponerse en forma objetiva, el numeral 8 indicó *“Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”*, por lo que faculta al operador jurídico a pronunciarse en todos los casos sobre si es o no procedente proferir una condena en costas en contra de la parte que ha visto frustrada sus pretensiones procesales.

### **CONSIDERACIONES**

El problema jurídico a resolver, se centra en determinar en virtud del recurso de apelación: i) Cual es la fecha a partir de la cual se debe contabilizar las semanas exigidas, si es la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral determinada en el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación o la establecida en primera instancia; ii) Determinar si se debe revocar la sentencia, al no cumplir el demandante el requisito de semanas establecido en la Ley 100 de 1993 primigenia; iii) Si hay lugar a que se realicen descuentos por incapacidades.

En caso de ser confirmada la sentencia de primera instancia, se analizará en virtud del grado jurisdiccional de consulta: i) Si el demandante tiene derecho al retroactivo pensional reconocido en primera instancia; ii) A la indexación de la condena; iii) Y a las costas procesales impuestas a cargo de Colpensiones.

#### **1. De la pensión de invalidez**

Se tiene que en primera instancia se reconoció la prestación económica de invalidez, teniendo en cuenta la sentencia SU 588 de 2016 y las sentencias SL 198 de 2021 y SL 002 de 2022, relativas a la capacidad laboral residual; se sustentó la decisión en las historias clínicas rememoradas en el dictamen de la Junta Regional de Calificación en concordancia con la historia laboral de la que resaltó que se evidencia que el demandante prestó su fuerza de trabajo a los empleadores por un espacio de 10 años aproximadamente; que las cotizaciones realizadas para los empleadores corresponden a periodos que inician en diciembre de 1988 a junio de 2002 en forma interrumpida, lo que evidencia interés del demandante para procurar su autosostenimiento, y con base a ello, dio aplicación a las reglas jurisprudenciales de las sentencias invocadas dado que el demandante sufre de una enfermedad congénita y crónica y degenerativa que le permitió realizar actividades productivas hasta el momento que se agudizaron sus síntomas laboral, **impidiéndole el desempeño laboral y con base a ello se decidió contabilizar las semanas a partir de la última cotización, que tuvo lugar el 30 de junio de 2002.** Y enfatizó que la teoría de la capacidad laboral residual, no modifica la fecha de estructuración, sino que flexibiliza la fecha para la contabilización de semanas.

Que, al contabilizar las semanas entre el 20 de junio de 2001 al 30 de junio de 2002, alcanzando a cotizar un total de 58,42 semanas, las cuales dan lugar al reconocimiento de la prestación con base en el art 39 de la Ley 100 de 1993 original, que exigía un total 26 semanas en el año anterior al estado de la invalidez, por ser un cotizante activo. Por lo que reconoció la prestación económica desde el 1º de julio de 2002.

Decisión de la que se aparta esta Sala, porque de la prueba aportada se concluye que en este evento no sería posible aplicar la tesis de la pérdida de la capacidad laboral residual, toda vez que tal y como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, dicha postura se presenta una vez se le haya determinado al afiliado la fecha de estructuración superior al 50% de pérdida de la capacidad laboral, y a pesar de ello el afiliado **continúa laborando y realizando aportes** al sistema de seguridad social en pensiones **con posterioridad a la fecha de estructuración**, entendiéndose con ello, que aún con padeciendo de salud, el afiliado cuenta con capacidad para continuar prestando un servicio activo en su vida laborando.

Al respecto se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3480 de 2022 al indicar *“Conforme al criterio actual de la Sala, la regla general para*

*efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez consiste en acreditar una pérdida de capacidad laboral de por lo menos el 50% y una densidad de semanas cotizadas dentro de un lapso o tiempo determinado, anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez y, de manera excepcional, **en relación con enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, es posible contabilizar las semanas posteriores a la estructuración de dicho estado, siempre y cuando sean producto de la capacidad laboral que le permita al afiliado desempeñar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar** (CSJ SL2332-2021)” (Resalto de la Sala)*

En ese sentido, los presupuestos facticos allí planteados no son los que se presentan en este caso, pues en este evento, el demandante dejó de cotizar en el **mes de junio de 2002** y solo se determina en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez que alcanza el 50% de la pérdida de la capacidad laboral el **24 de septiembre de 2003, fecha que es posterior a última cotización.**

En consecuencia, al no existir semanas de cotización posteriores al 24 de septiembre de 2003 **no se puede hablar de pérdida de la capacidad laboral residual.** Y sumado a ello, tampoco existe prueba para considerar que en el mes de junio de 2002 el actor no puso seguir laborando con ocasión a su estado de salud, pues las historias laborales que reposan en el plenario datan de los años 1989 y con posteridad al año 2003, existiendo una vació para el año 2002.

No obstante lo anterior, debe decirse, que teniendo en cuenta que la pensión de invalidez se constituye como una prestación a favor de la persona que ha perdido su capacidad laboral, como consecuencia de una enfermedad o un accidente, con la intención de garantizar el derecho al mínimo vital, permitiendo el acceso a un ingreso ligado con la preservación de una vida digna y de calidad, es claro que **la norma aplicable es la vigente al momento de la estructuración de la invalidez,** y en tal medida los periodos de cotización válidos para la causación del derecho por regla general son los cancelados con antelación a la estructuración del riesgo amparado, lo que impide admitir los efectuados con posterioridad.

Partiendo de lo señalado, la pensión de invalidez debe ser analizada en aplicación de la **norma vigente al momento de la fecha de estructuración** de la pérdida de la capacidad laboral, que para el caso que nos ocupa, **sería**

**el art. 11 de la Ley 797 de 2003 original y no el art. 39 de la Ley 100 de 1993 primigenia**, toda vez que:

- El art. 11 de la Ley 797 de 2003 tuvo vigencia a partir del 1º de enero de 2003
- La fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral tuvo lugar el 24 de septiembre de 2003
- Por medio de la sentencia C 1056 del 11 de noviembre de 2003, se declaró inexecutable el art. 11 de la Ley 797 de 2003, ello es, con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral.

En consecuencia, para el momento en que se estructuró la invalidez del Sr. Luis Rodrigo Sánchez Marín, se encontraba vigentes los requisitos del art. 11 de la Ley 797 de 2003 y el texto original de esa normativa, requería para que una persona tuviera derecho a la pensión de invalidez:

*“... 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado **50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración** y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (...)” (Resalto de la Sala)*

Siendo claro para la Sala, que en aplicación de esta normatividad, el actor tendría derecho a la pensión de invalidez toda vez que entre el 24 de septiembre de 2000 y el 24 de septiembre de 2003, cotizó un total de 625 días que equivalen a **89.28 semanas cotizadas**, superando con creces las 50 semanas exigidas por la norma.

Aunado a ello, no se hace necesario analizar la fidelidad de la cotización al sistema, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia C-428 de 2009, refiriéndose a la pensión de invalidez, declaró inexecutable el requisito del 20% de fidelidad de cotización al sistema de pensiones de invalidez del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años de edad y la fecha la primera calificación, previsto en la Ley 860 de 2003, al darle aplicación al principio de progresividad establecido en el art. 48 de la Constitución Política y a la prohibición de la regresividad contemplada en el art. 53 ibidem, frente a la protección prevista en las normas anteriores. Sobre el particular, indicó la Corte Constitucional, que cuando la norma posterior (Ley 797 de 2003 artículo 11º en el caso particular) reforma la anterior (Ley 100 de

1993 artículo 39), aumentando las semanas de cotización de los afiliados para adquirir la pensión de invalidez y estableciendo como nuevo requisito un porcentaje mínimo de fidelidad de cotización al sistema de pensiones en un tiempo limitado, la nueva normatividad debe ser sometida a un control judicial para analizar su grado de constitucionalidad.

La Corporación referida aduce que cuando una norma posterior implemente medidas regresivas que disminuyen la protección de ciertos derechos sociales que acogen a grupos de personas especialmente protegidos, se presume que la misma es inconstitucional cuando limita la protección del derecho, **o cuando aumenta sustancialmente los requisitos exigidos para acceder al mismo**, o cuando disminuye de manera importante los recursos públicos destinados a la protección de ese derecho. De ahí que el art 11° de la Ley 797 de 2003 configura una medida regresiva en tanto que introdujeron una exigencia adicional de fidelidad a los presupuestos que traía la Ley 100 de 1993, sin haber previsto un régimen de transición con el fin de que no resulten afectadas las personas que habían cotizado en vigencia de la Ley 100 y a quienes se les cambian los presupuestos legales, porque a pesar de no tener un derecho adquirido si tienen una expectativa legítima.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2009, indicó:

*“Cosa distinta ocurre con el nuevo requisito de fidelidad, toda vez que de los antecedentes de la norma, la Corte no encontró que esta medida para acceder a la pensión de invalidez, tuviera una finalidad legítima y plausible desde el punto de vista constitucional, que justificara la exigencia para poder acceder a la pensión de invalidez, de haber cotizado el 20% del tiempo transcurrido entre la fecha en que arribó a la edad de 20 años y el momento de la primera calificación de invalidez. **Sin duda, esta norma estableció un requisito más gravoso para acceder a esa prestación social, disminuyendo el nivel de protección.** Adicionalmente, la ley tampoco estableció un régimen de transición que permitiera a los trabajadores amparados por el régimen anterior continuar disfrutando de la posibilidad de acceder a dicha prestación social. Los propósitos de promover la cultura de afiliación y evitar el fraude, que pueden ser obtenidos por otros medios, resultan desproporcionados frente a la afectación de los derechos de las personas que se ven disminuida de manera grave su capacidad laboral por causa de enfermedad o accidente. En este punto, se reiteró la línea jurisprudencial sostenida en numerosos casos de tutela, en los cuales se ha inaplicado la disposición demandada por resultar manifiestamente contraria a la progresividad de los derechos sociales consagrada por el constituyente. En consecuencia, por lo expuesto, la Corte declaró exequibles los numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo en*



*los apartes que establecían el requisito de la fidelidad para acceder a la pensión de invalidez” (Resalto de la Sala)*

Así pues, considera la Sala que si el art. 1º de la Ley 860 de 2003 implementaba medidas regresivas dentro de ellas, exigía una “fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del **veinte por ciento (20%)** del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez” con mayor razón existió una medida regresiva que perjudicaba a los afiliados, cuando el art. 11 de la Ley 797 de 2003 exigía una “su fidelidad de cotización para con el sistema sea al **menos del 25%** del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”, es decir, la Ley 797 de 2003 consagraba un porcentaje de fidelidad superior al que se plasmó en la Ley 860 de 2003, lo cual da lugar a que sin lugar a dudas deba **inaplicarse** dicho el requisito de la fidelidad al sistema por ser abiertamente regresivo y contrario a la Constitución Nacional.

Esta inaplicación se ejecuta, teniendo como pilar, la sentencia SL 4346 de 2015, donde se analizó una pensión de sobreviviente con base en los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 original dado que la muerte del afiliado tuvo lugar el 13 de febrero de 2004 y donde se inaplicó el requisito de la fidelidad al sistema argumentando lo siguiente:

*“Es cierto que en casos similares al presente, la Corporación en el pasado, exigió en relación con la pensión de sobrevivientes, el cumplimiento por parte del causante del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del **artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexecutable, la CC C-556/09**, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutive no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.*

***No obstante lo anterior, la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, en sentencia CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 42540, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexecutable de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.***

*En esos eventos y ante la existencia de una previsión legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado social de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado Colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, **debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional.** Lo anterior significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.*

***Esto es, no se trata de darle efectos retroactivos a la decisión de inexequibilidad mencionada, sino de inaplicar el requisito de fidelidad por su evidente contradicción con el principio constitucional de progresividad que rige en materia de seguridad social. (...)*** (Resalto fuera del texto).

En consideración a lo expresado, se CONFIRMARÁ el reconocimiento de la pensión de invalidez al Sr. Luis Rodrigo Sánchez Marín, **pero por razones diferentes**, pues se repite, el demandante cumple el requisito de semanas exigido en el art. 11 de la Ley 797 de 2003 original.

## **2. De la condena impuesta en primera instancia a cargo de Colpensiones**

Ahora, teniendo presente el derecho que le asiste al actor al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, se hace necesario analizar en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, si el Sr. Luis Rodrigo Sánchez Marín tiene derecho a la pensión de vejez, retroactivo pensional en los términos se tiene que en primera instancia se condenó a Colpensiones.

Se extrae del plenario, que en primera instancia se condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de invalidez a partir del 1º de julio de 2002, a razón de un salario mínimo legal en cada anualidad; y a pagar la suma de \$168.425.512 por concepto de retroactivo pensional, causado desde el 1º de julio de 2002 (fecha de estructuración adoptada en primera instancia) al 30 de septiembre de 2022, con base en catorce mesadas por año, retroactivo que reconoció en forma indexada.

Decisión que se MODIFICARÁ, pues el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín reconoció la prestación adoptando como fecha de pérdida de

capacidad laboral material de la demandante, el **30 de junio de 2002**, bajo el argumento que el demandante sufre de una enfermedad congénita y crónica y degenerativa que le permitió realizar actividades productivas hasta el momento que se agudizaron sus síntomas laboral, impidiéndole el desempeño laboral y con base a ello se decidió contabilizar las semanas a partir de la última cotización, que tuvo lugar el 30 de junio de 2002, y al dar aplicación a la teoría de la capacidad laboral residual, flexibilizó la fecha de estructuración para la contabilización de semanas.

Visto lo anterior, al no ser posible aplicar en este evento la teoría de la capacidad laboral residual, por las razones analizadas en el numeral anterior, considera esta Corporación que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 24 de septiembre de 2003 (fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral determinada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez) y no desde el 1º de julio de 2002 como se indicó en primera instancia.

En consecuencia, se MODIFICARÁ el valor del retroactivo pensional reconocido en primera instancia, para en su lugar CONDENAR a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$163.008.912** por el retroactivo pensional causado desde el 24 de septiembre de 2003 al 30 de septiembre de 2022 (fecha de liquidación de la sentencia de primera instancia). Liquidación que al ser actualizada del 24 de septiembre de 2003 hasta el 31 de marzo de 2023, asciende a la suma de **\$170.488.912** (ver tablas que se anexan en la parte resolutive).

Para su liquidación se tiene en cuenta un salario mínimo legal por cada anualidad, y 14 mesadas pensionales por tener derecho a la pensión de invalidez con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005.

Se advierte que en este evento no operó el fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales, luego que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez fue emitido el 12 de enero de 2018, la reclamación fue elevada a Colpensiones el 24 de mayo de 2018, por medio de resolución 298.837 de 2018 se negó la prestación económica y el acta de reparto de la demanda tiene fecha del 11 de diciembre de 2018, sin que hayan transcurrido los 3 años de los que hacen referencia el artículo 488 del CST y el artículo 151 del CPT y de la SS.

En relación al pago de las incapacidades al actor, deben indicarse que en este evento no existe prueba del pago de las mismas, bajo el entendido que, el demandante cotizó a Colpensiones como trabajador dependiente hasta el 19 de junio de 2002 y la fecha de estructuración tuvo lugar el 24 de septiembre de 2003, prueba de la que se deriva que, al no ser un cotizante activo al sistema de seguridad social integral, es por lo que no tenía derecho al pago de incapacidades. Y aunado a ello, se corrobora con el registro del RUAF aportado por Colpensiones en el expediente digital 08, que el actor se encuentra afiliado a la EPS Savia Salud en el régimen subsidiado, y en ese sentido, el régimen subsidiado no reconoce incapacidades. En consecuencia, no se accederá al recurso de apelación presentado por el apoderado de Colpensiones.

## **2. Frente a la indexación de la condena**

Se CONFIRMARÁ la condena impuesta de pagar la indexación del retroactivo pensional, toda vez que la parte accionante no tiene por qué soportar la responsabilidad de asumir la pérdida del valor adquisitivo, y el capital adeudado ha sido afectado por pérdida del valor adquisitivo de la moneda, más aún cuando el artículo 180 del CGP indica que los indicadores económicos nacionales son hechos notorios.

## **3. Las costas en primera instancia**

Se CONFIRMARÁN, dando aplicación al art. 365 del CGP que expresa: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”, y en este evento, las pretensiones del reconocimiento de la pensión de invalidez en forma retroactiva e indexación fueron reconocidas a la parte accionante.

Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones, por no prosperar el recurso de apelación.

## **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia, en relación al reconocimiento de la pensión de invalidez al Sr. Luis Rodrigo Sánchez Marín, **pero por razones diferentes** y que se encuentran sustentadas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: MODIFICAR** el valor del retroactivo pensional reconocido en primera instancia, para en su lugar **CONDENAR** a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de **\$163.008.912** por el retroactivo pensional causado desde el 24 de septiembre de 2003 al 30 de septiembre de 2022 (fecha de liquidación de la sentencia de primera instancia).

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2003	6,49%	\$ -	\$ 332.000	\$ 332.000	4,2	\$ 1.394.400
2004	5,50%	\$ -	\$ 358.000	\$ 358.000	14	\$ 5.012.000
2005	4,85%	\$ -	\$ 381.500	\$ 381.500	14	\$ 5.341.000
2006	4,48%	\$ -	\$ 408.000	\$ 408.000	14	\$ 5.712.000
2007	5,69%	\$ -	\$ 433.700	\$ 433.700	14	\$ 6.071.800
2008	7,67%	\$ -	\$ 461.500	\$ 461.500	14	\$ 6.461.000
2009	2,00%	\$ -	\$ 496.900	\$ 496.900	14	\$ 6.956.600
2010	3,17%	\$ -	\$ 515.000	\$ 515.000	14	\$ 7.210.000
2011	3,73%	\$ -	\$ 535.600	\$ 535.600	14	\$ 7.498.400
2012	2,44%	\$ -	\$ 566.700	\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
2013	1,94%	\$ -	\$ 589.500	\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
2014	3,66%	\$ -	\$ 616.000	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
2015	6,77%	\$ -	\$ 644.350	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	5,75%	\$ -	\$ 689.454	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	4,09%	\$ -	\$ 737.717	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	3,18%	\$ -	\$ 781.242	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	3,80%	\$ -	\$ 828.116	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	1,61%	\$ -	\$ 877.803	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	5,62%	\$ -	\$ 908.526	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	13,12%	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	10	\$ 10.000.000
2023		\$ -		\$ -		\$ -
TOTAL						\$ 163.008.912

Liquidación que, al ser actualizada del 24 de septiembre de 2003 hasta el 31 de marzo de 2023, asciende a la suma de **\$170.488.912**

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2003	6,49%	\$ -	\$ 332.000	\$ 332.000	4,2	\$ 1.394.400
2004	5,50%	\$ -	\$ 358.000	\$ 358.000	14	\$ 5.012.000
2005	4,85%	\$ -	\$ 381.500	\$ 381.500	14	\$ 5.341.000
2006	4,48%	\$ -	\$ 408.000	\$ 408.000	14	\$ 5.712.000
2007	5,69%	\$ -	\$ 433.700	\$ 433.700	14	\$ 6.071.800
2008	7,67%	\$ -	\$ 461.500	\$ 461.500	14	\$ 6.461.000
2009	2,00%	\$ -	\$ 496.900	\$ 496.900	14	\$ 6.956.600
2010	3,17%	\$ -	\$ 515.000	\$ 515.000	14	\$ 7.210.000
2011	3,73%	\$ -	\$ 535.600	\$ 535.600	14	\$ 7.498.400
2012	2,44%	\$ -	\$ 566.700	\$ 566.700	14	\$ 7.933.800
2013	1,94%	\$ -	\$ 589.500	\$ 589.500	14	\$ 8.253.000
2014	3,66%	\$ -	\$ 616.000	\$ 616.000	14	\$ 8.624.000
2015	6,77%	\$ -	\$ 644.350	\$ 644.350	14	\$ 9.020.900
2016	5,75%	\$ -	\$ 689.454	\$ 689.454	14	\$ 9.652.356
2017	4,09%	\$ -	\$ 737.717	\$ 737.717	14	\$ 10.328.038
2018	3,18%	\$ -	\$ 781.242	\$ 781.242	14	\$ 10.937.388
2019	3,80%	\$ -	\$ 828.116	\$ 828.116	14	\$ 11.593.624
2020	1,61%	\$ -	\$ 877.803	\$ 877.803	14	\$ 12.289.242
2021	5,62%	\$ -	\$ 908.526	\$ 908.526	14	\$ 12.719.364
2022	13,12%	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	14	\$ 14.000.000
2023		\$ -	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000	3,0	\$ 3.480.000
TOTAL						\$ 170.488.912

Para su liquidación se tiene en cuenta un salario mínimo legal por cada anualidad y 14 mesadas pensionales.

**TERCERO: CONFIRMAR** en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín.

**CUARTO:** Costas en esta instancia en la suma de \$1.160.000 a cargo de Colpensiones, por no prosperar el recurso de apelación.

**QUINTO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: LUIS RODRIGO SÁNCHEZ MARÍN
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-010-2018-00751-01
RADICADO INTERNO	: 003-23
DECISIÓN	: CONFIRMA POR OTRAS RAZONES, MODIFICA Y CONDENA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 21 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 21 de marzo de 2023 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
**SECRETARIO**